

dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el Tribunal previamente establecido por la ley.

En todo juicio civil, las partes tendrán las siguientes garantías, además de las que se otorgan en la sección primera de esta Constitución:

- I. Que sean emplazadas legalmente.
- II. Que sean oídas por sí ó por mandatario constituído conforme á la ley del procedimiento.
- III. Que se les reciba el pleito á prueba, debiendo serlo.
- IV. Que se les admitan las pruebas que ofrezcan en tiempo y forma, si no son contra derecho.
- V. Que los hechos sobre que descansa el fallo, sean estimados legalmente.
- VI. Que si la sentencia se funda en ley, debe ser vigente y tomada del cuerpo de disposiciones que deben regir el caso, por razón del fuero y la materia.
- VII. Que la sentencia definitiva sea congruente con la demanda y las excepciones.

A la página 654.—La ejecutoria citada en la nota, cuya fecha se omitió por no haberse publicado todavía cuando se escribió este capítulo, lo fué después, y tiene la de 10 de Enero de 1901.

A la página 672.—Véase la ejecutoria citada en la adición á lo dicho en la página 210, sobre un amparo concedido contra una sentencia pronunciada en un juicio de baldíos. En ella no se tuvo como un obstáculo para la procedencia de amparo, la circunstancia de haberse desistido voluntariamente el quejoso del recurso de casación, que había interpuesto.

A la página 704.—Todavía el amparo á que se hace referencia en esta página, promovido por la Compañía de «El Buen Tono,» dió ocasión á otro nuevo amparo con motivo de la ejecución de la sentencia, el cual fué resuelto por ejecutoria de 13 de Mayo de 1901.

APENDICE

Núm. 1.

Leyes que han tenido por objeto asegurar la incolumidad de la Constitución, el equilibrio entre los diversos Departamentos en que se divide el Poder Público, y como consecuencia de ello la conservación de las garantías constitucionales.

Segunda Ley Constitucional sancionada el 30 de Diciembre de 1836.

«Art. 10. Habrá un Supremo Poder Conservador, que se depositará en cinco individuos, de los que se renovará uno cada dos años, saliendo en la primera, segunda, tercera y cuarta vez, el que designare la suerte, sin entrar en el sorteo el que ó los que hayan sido nombrados para reemplazar. De la quinta vez en adelante saldrá el más antiguo.

Art. 12. Las atribuciones de este Supremo Poder, son las siguientes:

1ª Declarar la nulidad de una ley ó decreto dentro de dos meses después de su sanción, cuando sean contrarios á artículo expreso de la Constitución, y le exijan dicha declaración, ó el Supremo Poder Ejecutivo ó la alta Corte de Justicia, ó parte de los miembros del Poder Legislativo, en representación, que firmen diez y ocho por lo menos.

2ª Declarar, excitado por el Poder Legislativo ó por la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios á la Constitución ó á las leyes, haciendo esta declaración dentro de cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos á las autoridades respectivas.

3ª Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos Poderes, y sólo en el caso de usurpación de facultades. Si la declaración fuere afirmativa, se mandarán los datos al Tribunal respectivo para que sin necesidad de otro requisito proceda á la formación de causa y al fallo á que hubiere lugar.

4ª Declarar por excitación del Congreso General la incapacidad física ó moral del Presidente de la República, cuando le sobrevenga.

5ª Suspender á la alta Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos Poderes Supremos, cuando desconozca á alguno de ellos ó trate de trastornar el orden público.

6ª Suspender hasta por dos meses (á lo más) las sesiones del Congreso General, ó resolver se llame á ellas á los suplentes por igual término, cuando convenga al bien público, y lo excite para ello el Supremo Poder Ejecutivo.

7ª Restablecer constitucionalmente á cualquiera de dichos tres Poderes, ó á los tres, cuando hayan sido disueltos revolucionariamente.

8ª Declarar, excitado por el Poder Legislativo, previa iniciativa de alguno de los otros dos Poderes, cuál es la voluntad de la Nación, en cualquiera caso extraordinario en que sea conveniente conocerla.

9ª Declarar, excitado por la mayoría de las juntas departamentales, cuándo está el Presidente de la República en el caso de renovar todo el Ministerio, por bien de la Nación.

10ª Dar ó negar la sanción á las reformas de Constitución que acordare el Congreso, previas las iniciativas, y en el modo y forma que establece la ley constitucional respectiva.

11ª Calificar las elecciones de los Senadores.

12ª Nombrar el día 1º de cada año diez y ocho letrados entre los que no ejercen jurisdicción ninguna, para juzgar á los Ministros de la alta Corte de Justicia y de la Marcial, en el caso y previos los requisitos constitucionales para esas causas.

Art. 13. Para cualquiera resolución de este Supremo Poder, se requiere indispensablemente la absoluta conformidad de tres de sus miembros, por lo menos.

Art. 14. Toda declaración que haga el Supremo Poder Conservador, toda resolución que tome, no siendo de las especificadas en el art. 12, y aunque sea de ellas si la toma *por sí* y sin la excitación que respectivamente se exige para cada una en dicho artículo, es nula y de ningún valor.

Art. 15. Toda declaración y disposición de dicho Supremo Poder Conservador, dada con arreglo á las disposiciones precedentes, y citando la respectiva, debe ser obedecida al momento y sin réplica, por todas las personas á quien se dirija y corresponda la ejecución. La formal desobediencia se tendrá por crimen de alta traición.

Art. 16. Los miembros de este Supremo Poder, durante el tiempo de su cargo y dentro de los dos años inmediatos siguientes, no pueden ser elegidos para la Presidencia de la República, ni obtener empleo que no les toque por rigurosa escala, ni ser nombrados para ninguna comisión, ni solicitar del Gobierno ninguna clase de gracia para sí ni para otro.

Art. 17. Este Supremo Poder no es responsable de sus operaciones más que á Dios y á la opinión pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones.

Art. 18. Si alguno de ellos cometiere algún delito, la acusación se hará ante el Congreso General, reunidas las dos Cámaras, el cual, á pluralidad absoluta de votos, calificará si ha lugar á la formación de causa, y habiéndolo, seguirá ésta y la fenecerá la Suprema Corte de Justicia; ante la que se seguirán también las causas civiles en que sean demandados.

Art. 19. Este Supremo Poder residirá ordinariamente en la Capital; pero en el caso de que la seguridad pública, ó la suya, exija su traslación á otro punto cualquiera de la República, podrá acordarla y verificarla por tiempo limitado.

Art. 20. El día 1º de cada bienio elegirá el Supremo Poder Conservador entre sus individuos un Presidente y un Secretario, pudiendo reelegir á los que acaban.

Art. 21. Se dirigirán al Secretario todas las comunicaciones de los otros Poderes.

Art. 22. Todas las discusiones y votaciones de este Cuerpo serán secretas, haciéndose las segundas por medio de bolas negras y blancas.

Art. 23. Aunque se le destinará un salón correspondiente en el Palacio Nacional, no tendrá días ni horas, ni lugar preciso para sus sesiones, y el Presidente las emplazará cuando convenga, por medio de esquelas citatorias á sus compañeros, en que especificará las dichas circunstancias.»

Acta de reformas de 18 de Mayo de 1847.

«Art. 21. Los Poderes de la Unión derivan todos de la Constitución y se limitan sólo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción.

Art. 22. Toda ley de los Estados que ataque la Constitución ó las leyes generales, será

declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores.

Art. 23. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General, fuere reclamada como anticonstitucional, ó por el Presidente, de acuerdo con su Ministerio, ó por diez Diputados, ó seis Senadores, ó tres Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto.

Las declaraciones se remitirán á la Suprema Corte, y ésta publicará el resultado, quedando anulada la ley, si así lo resolviere la mayoría de las Legislaturas.

Art. 24. En el caso de los dos artículos anteriores, el Congreso General y las Legislaturas á su vez, se contraerán á decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es ó no *anticonstitucional*; y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución ó ley general á que se oponga.

Art. 25. Los tribunales de la Federación ampararán á cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales á impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó del acto que lo motivare.»

Artículos 101 y 102 de la Constitución de 5 de Febrero de 1857.

«Art. 101. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó restrinjan la soberanía de los Estados.

III. Por leyes ó actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

Art. 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán á petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto que la motivare.»

Núm. 2.

Algunas leyes en que el Poder Ejecutivo ó el Legislativo se han atribuido facultades judiciales.

Decreto expedido por el Ejecutivo de la Unión, investido de facultades extraordinarias el 4 de Diciembre de 1829, declarando nulo su testamento.

«Instruido el supremo gobierno, de que el testamento bajo que falleció Doña María Teresa de Castañiza, fué efecto de la seducción de su confesor, desde mucho tiempo antes que lo otorgase: que la seducción resulta justificada por una carta escrita de puño y letra de la misma Sra. Castañiza, que no deja duda alguna, de haber sido prevenida enteramente, pues por las insinuaciones y diferentes ideas que se le influyeron y manifiesta la misma carta,

quedó en estado de verdadera ilusa: que los jesuitas recibieron en su casa públicamente los mayores obsequios, cuando regresaron de Italia, viviendo en su compañía algunos de ellos con su hermano el padre D. José María, y después al tiempo de reponerse la religión, ella fué la más empeñada en favorecerlos, por cuyos motivos permaneció con la misma ilusión y creencia, estableciendo en su testamento obras piadosas, que ponían en manos de los jesuitas todo su caudal, en fraude de lo dispuesto por la ley 15, tit. 20, lib. 10 de la Recopilación de Castilla, por haber sido el seductor miembro de la misma compañía de Jesús:

no pudiendo desentenderse el supremo gobierno, de que seguido esté negocio por los trámites judiciales ordinarios se hará interminable, con perjuicio de los herederos *ab intestato* de los mismos bienes, que en mucha parte desmerecerían ó acabarían del todo, y que dándole facultad á los albaceas ese testamento nulo, de nombrar por su muerte otros que les sucedan, vendría á verificarse quedarán sujetos á un fideicomiso perpetuo, lo que está prohibido por diversas leyes, ha considerado de su deber dispensar á los herederos *ab intestato* la protección y amparo que han implorado, para que se reduzca la ley á efecto del mismo modo que ordenan sus materiales expresiones, respecto de que la nulidad y seducción resultan justificadas de hecho por la misma carta escrita por la testadora: y usando de las facultades extraordinarias que le están concedidas, entre otros objetos, para proporcionar recursos con que atender á los gastos urgentísimos de la hacienda pública, admite la donación que los herederos *ab intestato* de la Sra. Castañiza hacen de entregar las sumas de cuarenta mil pesos en efectivo y sesenta mil en capitales y réditos de créditos reconocidos, pues de esta suerte la misma hacienda pública es beneficiada, por cualesquiera derecho que aun en el caso más remoto pudiera deducir contra los mismos bienes: y ordena, que respecto de haber tomado bajo de su protección y amparo á los herederos *ab intestato*, el albacea ó albaceas de la mencionada Sra. Castañiza, les entreguen inmediatamente todos los bienes y papeles de la testamentaria, para que procedan á repartirlos entre sí según convengan, sin admitirles á los albaceas reclamo ni oposición, pues para sólo este caso quedan sin efecto las disposiciones de las leyes de que puedan prevalerse: que entregados los bienes y papeles, rindan los citados albaceas la cuenta correspondiente á la persona que los expresados parientes nombren y diputen; entendiéndose esta disposición sin perjuicio de las deudas legítimas y comprobadas que contra sí reporte la testamentaria, las que precisamente y en toda forma se obligarán á satisfacer los herederos *ab intestato*, en aquella manera en que se compongan y ajusten con los acreedores: y esta determinación se llevará inmediatamente á puro y debido efecto por la comandancia general, dando cuenta al supremo gobierno de haberlo así ejecutado, sin embargo de cualesquiera contradicción ó reclamo como queda dicho, expidiéndose la orden correspondiente por el ministerio de la guerra al comandante general, para que por sí mismo presencie la entrega de bienes y papeles, y cumpla con lo mandado en este decreto. Dado en el palacio federal de México á cuatro de diciembre de mil ochocientos veinte y nueve.—*Viente Guerrero*.—A D. Francisco Moctezuma.»

Decreto que dejó sin efecto el anteriormente copiado.

«México, Diciembre 29 de 1829.—Librese orden á la comandancia general, para que reponiendo todas las cosas relativas al negocio de la testamentaria de Doña María Teresa Castañiza, al ser y estado que tenían antes del decreto de cuatro del actual, continúe en el conocimiento de dicho negocio con total arreglo á las leyes, comunicándose esta resolución al ministerio de hacienda.»

(Observaciones sobre el acuerdo de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,

relativo á la testamentaria de la Sra. Da María Teresa Castañiza de Basoco, México, Imprenta del Aguila, 1830.)

Ley en que se dispone la expatriación de varias personas y de cuantas estuvieron en el mismo caso.

«Art. 1º El Gobierno hará que inmediatamente se proceda á asegurar, para expeler del territorio de la República por seis años, á los individuos siguientes y cuantos se encuentran en el mismo caso, sin necesidad de nuevo decreto:

D. Francisco Sánchez de Tagle.	Teniente Coronel D. Miguel González.
» Francisco Molinos del Campo.	D. Florentino Martínez.
» Florentino Cornejo.	» José Morán.
» Joaquín Ramírez y Sesma.	» Nicolás Candelle.
General D. Jesús Fernández.	» Eulogio Villasana.
Teniente Coronel D. Pablo Barreiro.	» Antonio Villaurrutia.
D. Mariano Michelena.	» Mariano Villaurrutia.
» Antonio Alonso Terán.	» Juan Nepomuceno Quintero.
» Francisco Almirante.	» Antonio Fernández Monjardín.
» José Fontecha.	» José Segundo Carvajal.
» Francisco Fagoaga.	» José María Gutiérrez Estrada.
» Joaquín Villa (médico).	» Miguel Barreiro.
» Félix López Vergara.	» Felipe Codallos.
Canónigo Doctoral Posadas.	» José Andrade.
Magistrado D. Joaquín Oteiza.	Canónigo Irisarri.
Canónigo D. Joaquín Madrid.	D. Anastasio Bustamante.
D. Miguel Santa María.	» Rafael Mangino.
» Juan Nepomuceno Navarrete.	» Mariano Paz y Tagle.
» José Domínguez Manzo.	» Pedro Manuel Guerra.
» Carlos Beneschí.	» Luis Antepara.
» José Antonio Mozo.	Coronel Joaquín Orihuela.
» Gabriel Yermo.	D. José Anievas.
» José Yermo.	» Rafael Dávila.
» José Gómez de la Cortina.	Médico español Martínez Gutiérrez.
» Domingo Pozo.	Espanoles religiosos.
» José Cacho.	Lic. Manuel Cortazar.

«Art. 2º Los individuos que se ocultan y que según la presente ley deban salir de la República, se presentarán á las autoridades locales de su residencia, á más tardar, dentro de tres días de publicada esta ley en los lugares en que residan; y caso de no verificarlo, el gobierno al apresarlos podrá aumentarles el tiempo de su destierro.

«Art. 3º Las autoridades, bajo su más estrecha responsabilidad, cuidarán de indagar el paradero de los que debiendo salir del territorio de la República se ocultan; en el concepto de que se les castigará cualquiera omisión con una multa que no pase de mil pesos, y en su defecto, con una prisión que no exceda de seis meses, duplicándose estas penas á las autoridades que los encubran.

«Art. 4º Los expulsos á virtud de esta ley serán reembarcados y expulsados para siempre del territorio de la República, si ocurriesen á ella antes de haber expirado el tiempo de su expulsión.

«Art. 5º Las autoridades políticas y militares de los puertos y lugares fronterizos serán responsables con sus empleos del cumplimiento del artículo anterior.

«Art. 6º El Gobierno podrá designar el lugar en que deban residir aquellos individuos que expelan los Estados de sus respectivos territorios, pudiendo lanzarlos del de la Nación, cuando lo considere necesario, según las circunstancias de las personas.

«Art. 7º El Gobierno podrá invertir la cantidad que estime necesaria para el transporte de los individuos que deben salir del país y que no cuenten con recursos para trasladarse á sus expensas.

«Art. 8º A los que se expulsan por esta ley, si fueren empleados, podrá el Gobierno asignarles hasta las dos terceras partes del sueldo que actualmente disfruten; en caso que no cuenten con bienes propios para sostenerse. Junio 23 de 1833.»

(Colección de leyes y decretos del Congreso General de la Nación Mexicana en los años de 1833 á 1835, corregidos y arreglados por una Comisión del Congreso.—Imprenta de Galván).

Núm. 3.

Opiniones de algunos publicistas acerca de las funciones que desempeñan los Tribunales Federales en los Estados Unidos de América.

«He juzgado por conveniente hacer un capítulo por separado para tratar del Poder Judicial, pues es de tanta entidad su importancia política que me ha parecido desmejorarla á los ojos del lector si hablase de ella de paso.

«Existido han confederaciones en partes diferentes de América; se han visto repúblicas en otros puntos que no eran las riberas del Nuevo Mundo; está adoptado el sistema representativo en varios Estados de Europa; pero no creo que hasta ahora en ninguna nación esté constituido el Poder Judicial del mismo modo que entre los americanos. Lo que un extranjero comprende con mayor dificultad en los Estados Unidos es la organización judicial, porque no hay por decirlo así evento político en que no oiga llamar la autoridad del juez, de lo que infiere naturalmente que allí éste es una de las primeras potestades políticas, y luego al examinar la constitución de los tribunales no descubre en ellos á primera vista más que atribuciones y hábitos judiciales, no pareciéndole á su vez que el Magistrado se introduzca jamás en los negocios públicos sino al acaso; pero este acaso vuelve todos los días. Cuando el Parlamento de París hacía amonestaciones, y se oponía á registrar un edicto; cuando mandaba él mismo comparecer ante sí, constituido en Tribunal, á un funcionario prevaricador, se percibía á descubierto la acción política del Poder Judicial; pero nada de esto se ve en los Estados Unidos. Los americanos han conservado al Poder Judicial todos los caracteres con que se le suele reconocer, encerrándole exactamente en el círculo en que acostumbra moverse.

«El primer carácter de la Potestad Judicial de todos los pueblos es servir de árbitro. Para que se dé lugar á acción por parte de los tribunales, es preciso que haya contestación, y para que haya juez, proceso, pues en tanto que una ley no dé margen á una contestación, el Poder Judicial no tiene oportunidad de ocuparse de ella; existe, sí, mas no le ve. Cuando un juez con motivo de un proceso ataca una ley relativa á este proceso, extiende el círculo de sus atribuciones, pero no sale de él, puesto que le ha sido necesario, digámoslo así, juzgar la ley para llegar á juzgar el proceso. Cuando pronuncia sobre una ley sin partir de un proceso sale completamente de su esfera y se interna en la del Poder Legislativo.

«El segundo carácter de la potestad judicial es fallar sobre casos particulares y no sobre principios generales. Si un juez decidiendo una cuestión particular destruye un principio general por la certidumbre que tiene que estando zanjada del mismo modo cada una de las consecuencias de este mismo principio, se hace estéril aquél, permanece en el círculo natural de

su acción. Pero que el juez ataque directamente el principio general y le anonade sin tener á la mira un caso particular, sale del círculo en que todos los pueblos han convenido en cerrarle, en cuyo caso llega á ser algo de más importante y de más útil quizá para un oficial público, pero cesa de representar el Poder Judicial.

«Su tercer carácter es el no poder obrar sino cuando se le llama, ó según la expresión legal, cuando conoce de la causa, cuyo carácter no se encuentra tan generalmente como los otros dos, aunque en mi entender se le puede considerar como esencial á pesar de las excepciones. El Poder Judicial de suyo carece de acción, y así se le debe poner en movimiento para que se active. Denúnciasele un crimen, y castiga al culpable; se le invita á subsanar una injusticia, y la subsana; se le consigna un acto, y le interpreta; pero no va de suyo á procesar á los delinquentes á averiguar la injusticia y examinar los hechos, pues el Poder Judicial como que violentaría esta naturaleza pasiva, si tomase de suyo la iniciativa y se constituyese censor de las leyes.

«Los americanos han conservado al Poder Judicial estos tres caracteres distintivos. El juez americano no puede fallar sino cuando hay litigio; nunca se ocupa más que de un caso particular; y para obrar, siempre debe aguardar que conozca de él. Por consiguiente el juez americano se asemeja perfectamente á los Magistrados de las demás naciones, y sin embargo está revestido de un inmenso poder político. ¿De dónde pues dimana eso? ¿Cómo es que moviéndose en el mismo círculo y sirviéndose de los mismos arbitrios que los demás jueces, posee una potestad de que carecen estos últimos? La causa de ello se encuentra en el solo hecho de que los americanos han reconocido á los jueces derecho para fundar sus sentencias más bien en la Constitución que en las leyes, ó con otros términos, les han permitido el no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales. Bien sé que semejante derecho le han reclamado algunas veces los tribunales de otros países, mas nunca se ha accedido á ello. En América le reconocen todos los poderes, y no se encuentra un partido y ni siquiera un hombre que le conteste. La explicación de esto se debe hallar en el mismo principio de las constituciones americanas.

«En Francia la Constitución es una obra inmutable ó reputada por tal, y á ningún poder le sería dable trincar nada en ella, pues tal es la teórica aceptada.

En Inglaterra se reconoce al Parlamento el derecho de modificar la Constitución, y así en este último país puede cambiarla incesantemente, ó por mejor decir, ella no existe. El Parlamento, al par que es cuerpo legislativo, es cuerpo constituyente.

«En América las teorías políticas son más sencillas y racionales, pues una Constitución americana no se juzga inmutable como en Francia, y no cabría ser modificada por los poderes ordinarios de la sociedad, como sucede en Inglaterra. Forma una obra aparte, que representando la voluntad de todo el pueblo, obliga así á los legisladores como á los meros ciudadanos, pero que puede mudar la voluntad del pueblo, según formas ya establecidas y en casos ya previstos. Por eso en América puede variar la Constitución, mas en tanto que existe, es origen de todos los poderes, y en ella sola reside la fuerza predominante.

«Fácil cosa de ver es en qué deben influir estas diferencias en la posición y derechos del cuerpo judicial en los tres países que he citado. Si en Francia pudieran desobedecer las leyes los tribunales, atendidos á que las encuentran inconstitucionales, residiría realmente en su mano el poder constituyente, supuesto que ellos solos tendrían derecho para interpretar una Constitución cuyos términos nadie podría trasmutar, y así harían las veces de la Nación, y predominarían en la sociedad otro tanto, por lo menos, que se lo permitiría hacer la flaqueza inherente al Poder Judicial. No se me oculta que, quitando nosotros á los jueces el derecho de declarar inconstitucionales las leyes, damos indirectamente al cuerpo legislativo la facultad de mudar la Constitución, pues que no encuentra ya valla legal que la ataje. Pero todavía vale más conceder el poder de remudar la Constitución del pueblo á sujetos que representan imperfectamente las disposiciones de éste, que á otros que sólo se representan á sí